

te, la existencia de varias deudas contraídas por parte de la entidad Sanatorio Santa Rita, el seguimiento de un expediente de regulación de empleo, así como que por Junta Universal de esta sociedad se ha acordado su disolución y liquidación, circunstancias todas ellas que efectivamente ponen de manifiesto que la situación económica de dicha entidad mercantil no obedece a causas esporádicas o aisladas, sino a una verdadera insolvencia general y completa, por lo que debe estimarse el recurso interpuesto.

Segundo.—Que la estimación del recurso conlleva declarar en estado de quiebra necesaria a la compañía mercantil «Sanatorio Santa Rita, Sociedad Limitada», con los efectos inherentes a tal situación y que se concretarán en la parte dispositiva de la presente resolución, debiendo precisar que para la determinación de la fecha de retroacción de los efectos de esta declaración de quiebra, a la vista de los datos de que se disponen hasta la fecha, se fija el día 25 de marzo de 2000, fecha de vencimiento del pagaré más antiguo de los que es tenedora una de las acreedoras promoventes.

Parte dispositiva

Dispongo: Que estimando el recurso interpuesto por la promovente, debo revocar y revoco el auto de fecha 17 de julio de 2000, declarando en estado de quiebra necesaria a la entidad «Sanatorio Santa Rita, Sociedad Limitada», con domicilio en esta ciudad de Pontevedra, calle Peregrina, número 54, quedando inhabilitado su representante Legal, don José Luis Martín Peci, para la disposición de sus bienes, retrotrayéndose la quiebra al día 25 de marzo de 2000, fecha en la que consta comenzó a cesar en el pago corriente de sus obligaciones, sin perjuicio de lo que en su día resultare.

Se nombra comisario de la quiebra al Auditor de Cuentas don Rafael López Mera, quien deberá comparecer a aceptar y jurar el cargo para, verificado, proceder de inmediato a la ocupación de bienes y papeles de la expresada sociedad quebrada, inventario y depósito en la forma que la Ley determina, debiendo ser requerido para que, en el término de tres días, presente estado o relación de acreedores a fin de poder convocar la primera Junta de Acreedores, y para que en el término de quince días emita el informe a que se refiere el artículo 1.382 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a tenor de lo que resulte del reconocimiento de libros y papeles del quebrado, para poder llevar a cabo una calificación de la quiebra.

Se nombra depositario de la quiebra a don Óscar Manuel Salvador Núñez, quien deberá comparecer asimismo y aceptar y jurar el cargo ante este Juzgado poniéndose bajo su custodia la conservación de todos los bienes que se ocupen hasta que se nombre la sindicatura de la quiebra.

Se declara la retención de la correspondencia postal y telegráfica de la entidad quebrada, a los efectos expresados en el artículo 1.058 del Código de Comercio de 1829, librando para ello oportuno oficio al señor Jefe de Correos y Telégrafos de Pontevedra.

Se decreta el arresto domiciliario de don José Luis Martín Peci, que producirá efectos desde el momento en que les sea notificado el presente Auto pudiéndose librar de tal medida precautoria si presta fianza de cualquiera de la clase admitida por la Ley, excepto la personal, por la suma de un millón (1.000.000) de pesetas.

Se decreta la inhabilitación de los órganos sociales de la quebrada para los actos de administración relativos al tráfico de la misma.

Se acuerda requerir a la quebrada, a través de su representante legal, señor Martín Peci, para que en el término no superior a siete días, presente el balance general de sus negocios.

Se acuerda la acumulación al presente juicio universal de quiebra de todos los pleitos y ejecuciones pendientes contra la entidad quebrada, excepto aquellos que persigan bienes especialmente hipotecados, debiendo participar por la solicitante a este Juzgado los procedimientos pendientes en tramitación contra la entidad quebrada para acordar lo procedente. A tal efecto, librense oficios a los Juz-

gados de Primera Instancia de Pontevedra al objeto de que por el Secretario correspondiente se certifique la existencia de los procedimientos a que se refiere la acumulación decretada.

Procedase a la publicación de esta declaración de quiebra mediante edictos que se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín Oficial» de la provincia, y que se fijarán además, en el tablón de anuncios de este Juzgado, en los que se hará constar que la entidad quebrada ha quedado inhabilitada para la administración y disposición de sus bienes, previniéndose que nadie haga pagos, ni entrega de bienes a la quebrada, debiendo verificarlo desde ahora al depositario y posteriormente a los señores síndicos, previniendo a todas aquellas personas en cuyo poder existan bienes pertenecientes a la quebrada para que hagan manifestación de ello al Comisario de la Quiebra, bajo apercibimiento de ser tenidos por ocultadores de bienes y cómplices de la quebrada, con la advertencia general que desde la fecha de esta declaración de quiebra se tienen por vencidas las deudas pendientes de la quebrada y dejan de devengar intereses todas las deudas.

Librese Mandamiento a los señores Registradores de la Propiedad y Mercantil de Pontevedra, a los efectos oportunos.

Cumplímense y cúrsese el oportuno boletín oficial a la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística.

Una vez que el Comisario presente el estado o relación de acreedores se acordará lo procedente para la celebración de la Junta para el nombramiento de Síndicos.

Notifíquese esta resolución a la entidad quebrada, haciéndole saber que puede oponerse a la declaración de quiebra en el término de ocho días, y participase la incoación de este procedimiento al Fondo de Garantía Salarial a los fines prevenidos en el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores.

Contra esta resolución puede interponerse por la actora Recurso de Reposición en el término de tres días y la quebrada puede oponerse a la declaración de quiebra en el plazo de ocho días.

Pontevedra, 13 de noviembre de 2000.—Lo acuerda y firma S. S.^a, doy fe.—El Magistrado-Juez.—El Secretario.—65.388.

PUERTO DEL ROSARIO

Edicto

Don Carlos Vielba Escobar, Juez de Primera Instancia número 1 de Puerto del Rosario,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el número 405/88, se tramita procedimiento de juicio ejecutivo a instancia de Caja Insular de Ahorros de Canarias, contra don Ricardo de León Hernández, doña Carmen Rodríguez Sosa y Distribuidora Insular Gremio Alimentación, en el que por resolución de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, por primera vez y término de veinte días, los bienes que luego se dirán, señalándose para que el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día 23 de enero de 2001, a las doce horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no cubran las dos terceras partes del avalúo.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte en la subasta, deberán consignar, previamente, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima» número 3514/0000/17/0405/88, una cantidad igual, por lo menos, 20 por 100 del valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar el número y año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico o cheques.

Tercera.—Únicamente el ejecutante podrá concurrir con la calidad de ceder el remate a terceros.

Cuarta.—En todas las subastas, desde el anuncio hasta su celebración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a que se ha hecho referencia anteriormente.

Los autos y la certificación registral que suple los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en la Secretaría del Juzgado donde podrán ser exa-

minados, entendiéndose que todo licitador acepta como bastante la titulación existente y que las cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsistentes sin destinarse a su extinción el precio del remate y se entenderá que el rematante las acepta y queda subrogado en la responsabilidad de las mismas.

Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera subasta, se señala para la celebración de una segunda el día 21 de febrero de 2001, a las doce horas, sirviendo de tipo el 75 por 100 del señalado para la primera subasta, siendo de aplicación las demás prevenciones de la primera.

Igualmente, y para el caso de que tampoco hubiere licitadores en la segunda subasta, se señala para la celebración de una tercera el día 21 de marzo de 2001, a las doce horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar parte en la misma, el 20 por 100 del tipo que sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Bienes que se sacan a subasta y su valor

Finca 7.252, inscrita al tomo 273, libro 65 de Puerto del Rosario: Finca urbana, en el término municipal de Puerto del Rosario, Isla de Fuerteventura, solar situado en la calle Valencia, parcela 39, manzana A-3, de una superficie de 316 metros cuadrados.

Valor a efectos de subasta, en siete millones novecientos mil (7.900.000) pesetas.

Finca 5.338, inscrita al tomo 231, libro 54 de La Oliva: 1/6 parte de la finca rústica, situada en el término municipal de La Oliva, en la área denominada zona de servicios. (3.575 metros cuadrados).

Valor a efectos de subasta, en dos millones ochocientos sesenta mil (2.860.000) pesetas.

Para el caso de que no puedan ser hallados los demandados en su domicilio, servirá la presente de notificación en legal forma.

Puerto del Rosario, 26 de septiembre de 2000.—El Juez.—El Secretario.—65.399.

ROQUETAS DE MAR

Edicto

Don Luis Boraita Murillo, Juez sustituto del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Roquetas de Mar,

Hago saber: Que en dicho Juzgado, y con el número 192/1999, se tramita procedimiento judicial sumario al amparo del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de Caja Rural de Almería, Sociedad Cooperativa de Crédito, contra don Antonio José Rojas Huertas y doña Elvira Antonia Paniagua Hernández, en reclamación de crédito hipotecario, en el que, por resolución de esta fecha, se ha acordado sacar a pública subasta, por primera vez y término de veinte días, el bien que luego se dirá, señalándose para que el acto del remate tenga lugar, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el día 15 de enero de 2001, a las once horas, con las prevenciones siguientes:

Primera.—Que no se admitirán posturas que no cubran el tipo de la subasta.

Segunda.—Que los licitadores, para tomar parte en la subasta, deberán consignar, previamente, en la cuenta de este Juzgado en el «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima», número 0257-0000-18-0192-99, una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 del valor del bien que sirva de tipo, haciéndose constar el número y el año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico o cheques en el Juzgado.

Tercera.—Podrán participar con la calidad de ceder el remate a terceros.